

Frente a frente



Rafael Rodríguez
 Gerente general Fundación San Carlos de Maipo

¿Y si fueran nuestros hijos?

Opinar de políticas para niños y niñas que perdieron los cuidados de su familia de origen es hablar de una tragedia profundamente compleja, donde están en juego vidas en las que hubo vulneraciones graves. Lamentablemente no hay ninguna solución en la que no vayan a existir complejidades e incluso tragedias, porque en estos casos siempre se llega tarde. Pero justamente para eso está la política pública, para tomar decisiones difíciles si es que mejoran la calidad de vida de las personas a las que sirve.

Hoy en Chile está en juego el tipo de modelo de cuidado alternativo que se va a priorizar desde el Ejecutivo y la evidencia es contundente: los cuidados residenciales, en comparación con los modelos de cuidados familiares, generan mayores problemas en el desarrollo cognitivo y emocional y donde además aumenta significativamente el riesgo de quedar fuera del sistema escolar formal y de vincularse en conductas de violencia y delincuencia. Caso aparte para el aumento del riesgo de ser explotado sexualmente, situación que afecta a más del 30% de las adolescentes en residencias.

El primer principio que debe orientar cualquier política pública sería es simple: los programas sociales deben basarse en la evidencia. No en inercias institucionales, no en la costumbre, no en opiniones particulares. Organismos internacionales como Unicef, Relaf, la Cooperación Británica y la Academia (local e internacional) coinciden en que el cuidado familiar es superior para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Los países que han hecho el tránsito no han vuelto atrás más que para situaciones específicas, donde el cuidado residencial es más adecuado.

El segundo principio es la focalización de los recursos. Hoy los nudos críticos están claros: necesitamos captar más familias de acogida y más familias adoptivas, fortalecer el apoyo a las familias de origen, extensas y externas y acelerar la tramitación de medidas judiciales para apoyar, tanto al Servicio de Protección Especializada como a los tribunales de familia. No haber invertido lo suficiente en estos ámbitos ha hecho que sea imposible avanzar y, por lo mismo, el seguir destinando la mayor parte del presupuesto a sostener residencias hace que sea muy difícil cambiar de modelo, porque no hay recursos para mejorar los programas de familias de acogida y sin recursos suficientes, nada va a funcionar bien, ni residencias ni familias de acogida. Lo que redundará en que sigan existiendo vulneraciones graves en niños que podrían estar mejor.

Un país serio y responsable también diseña las políticas públicas como si fueran para los hijos de cualquiera. Y frente a la hipotética tragedia de que nuestros hijos quedasen huérfanos, nadie querría como destino que vivieran en una residencia. Entonces, ¿por qué aceptamos que ese sea el modelo para quienes no tienen familia y hoy carecen de alguien que pueda cuidarlos? ¿Por qué toleramos que se les someta a un sistema donde ocurren sistemáticamente vulneraciones graves de derechos?

La sociedad civil y los funcionarios públicos debemos hacer incidencia no para conservar lo que existe, sino para acelerar la transición hacia lo que debería ser.

No debemos olvidar algo tan simple como esencial: el principal derecho de los niños es a vivir en una familia que pueda cuidarlos y quererlos. En Chile, hasta hoy, ese derecho sigue sin cumplirse para quienes más lo necesitan y es responsabilidad nuestra cambiar esta realidad. Si fueran nuestros hijos, lo haríamos.



Teresa Izquierdo
 Coordinación Mesa de Residencias

Avanzar sin dejar a nadie atrás

Que ningún niño menor de cuatro años deba vivir en una residencia cuando existe una alternativa familiar es un horizonte que compartimos. La evidencia es inequívoca. Pero entre esa meta y la realidad hay una distancia que no podemos ignorar. Valoramos que el gobierno haya asumido este desafío con estrategia y voluntad, las residencias deben ser la última opción. Tenemos que caminar hacia una cultura de acogimiento familiar, ampliar la oferta de programas con familias externas y responder a las necesidades reales de los niños, niñas y adolescentes. Como residencias queremos contribuir a avanzar en ese sentido.

Mientras nos acercamos a ello hay una conversación impostergable. En los últimos dos años cerraron más de 40 residencias por problemas de financiamiento: según un estudio encargado por el Servicio de Protección a la Universidad de Chile, el aporte estatal cubre solo el 70% de los costos de atención por niño. Esa brecha hace inviable la continuidad de muchos proyectos. El escenario se agrava con el ajuste presupuestario del Ministerio de Desarrollo Social, donde el Servicio concentra el mayor recorte, con una rebaja de \$12.748 millones, equivalente al 39%. El efecto, un círculo vicioso: menos residencias, más licitaciones desiertas y espacios que funcionan con modelos de intervención antiguos y recursos insuficientes, sin opción real de mejora. Entre 2019 y 2024, se perdieron más de 1.400 plazas, mientras la demanda no bajó.

El resultado, según el Informe de IdeaPaís (2026): una de cada dos residencias tiene sobrecupo. Eso se traduce en atención menos personalizada, convivencia tensionada y el debilitamiento de lo que justificó el rediseño del sistema: un entorno más pequeño y estable, como una familia. A eso se suma el desgaste de los equipos, expuestos a crisis generadas por problemas de salud mental, consumo o conductas transgresoras.

Y las residencias lo enfrentan muy solas. La mayoría de los niños tiene diagnóstico de salud mental, pero la atención especializada no alcanza. Salud, educación, justicia, que deberían ser corresponsables, no están y las residencias asumen esos vacíos con recursos insuficientes.

Según datos de abril, 638 niños menores de cuatro años viven en residencias esperando una familia de acogida. Para que eso cambie necesitamos un plan de transición gradual, ordenado y realista. Avanzar a una cultura de acogimiento familiar es clave, pero no puede significar desmantelar el sistema residencial sin una oferta suficiente de familias de acogida. Reunificar familias, declarar susceptibilidades de adopción, ampliar programas de acogimiento y acompañar a las familias supone tiempo y recursos. Y requiere reconocer que el acogimiento familiar no es una solución universal. Hermanos que no pueden separarse, niños con enfermedades crónicas, hijos de madres privadas de libertad: necesitan rutas diferenciadas.

El desafío es contar con residencias más especializadas y perfiles de atención diferenciados. Un niño que requiere protección no necesita lo mismo que un adolescente con consumo. Una primera etapa razonable es transitar hacia modelos integrados: residencias articuladas con programas de familias de acogida, priorizando el cuidado familiar en la medida en que exista una red preparada.

Se requiere realismo, responsabilidad, financiamiento, un Estado corresponsable y una hoja de ruta que garantice una alternativa real de protección para cada niño que lo requiera. Transformar el sistema es urgente y necesario, pero hacerlo bien exige no dejar a nadie atrás.

¿Cómo abordar las deficiencias que hoy enfrenta el sistema de Mejor Niñez?

La crisis que enfrentó el Sename hace más de una década dio pie a una reforma profunda, creando Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. La publicación, sin embargo, de un informe de IdeaPaís pone en evidencia situaciones preocupantes en las residencias, las listas de espera para estas y para programas de diagnóstico, entre otros problemas, que cuestionan cómo se ha implementado esta política pública.

